

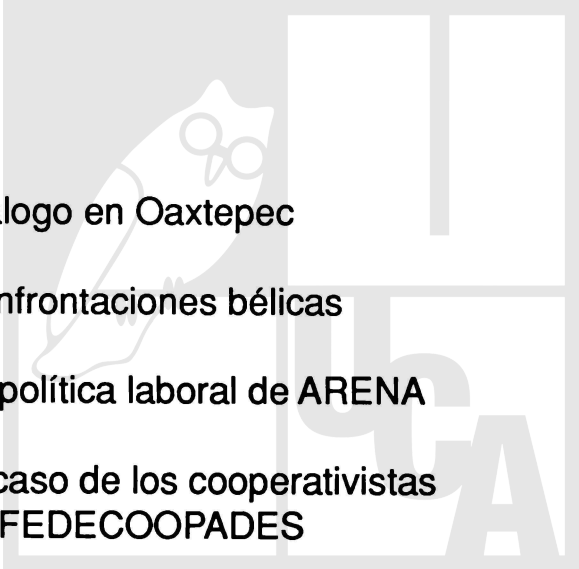
# El Salvador proceso

informativo semanal

año 11  
número 433

junio 27  
1990  
ISSN 0259-9864

centro universitario de documentación e información

- 
- Diálogo en Oaxtepec
  - Confrontaciones bélicas
  - La política laboral de ARENA
  - El caso de los cooperativistas de FEDECOOPADES
  - Cumbre económica en Antigua Guatemala

## Diálogo en Oaxtepec

Ha concluido la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno y el FMLN, en el marco del Acuerdo de Ginebra. Con ello se ha entrado de lleno en lo que sería el cuarto ciclo de diálogos por la paz después de las rondas de octubre-noviembre de 1984, noviembre de 1987 y septiembre-octubre del año pasado.

Dicho genéricamente, la ronda de conversaciones que recién ha finalizado deja las mismas esperanzas y las mismas dudas que dejaron las de octubre de 1989 (Cfr. **Proceso 405**), con los agravantes que supone la simple repetición en política de pacificación. No obstante, el riguroso método de diálogo y la seria mediación ahora empleados, así como lo poco que con ello se ha logrado hasta el momento, sirven para iluminar la complejidad del problema y la total insatisfactoriedad del método antes usado para abordarlo. Reconocer lo anterior resulta provechoso, no para lamentar lo poco que al parecer se ha progresado en la actual etapa, sino para situar y valorar justa y objetivamente todas las pláticas anteriores; y sobre todo para que no se incurra tan fácilmente en la propaganda belicista, extrayendo de aquellas pláticas signos de la poca voluntad para el diálogo y la paz de alguna de las partes.

Por los contenidos abordados en la actual etapa negociadora, y aun por la atmósfera que se ha propiciado durante su celebración, también puede afirmarse que aún permanece bajo el signo y los límites que caracterizaron a las pláticas de septiembre-octubre de 1989. En cuanto a las prioridades de la negociación, se mantiene la discrepancia principal del año anterior. Por el lado del gobierno, pese a que el acuerdo de Ginebra establece como prioridad la consecución de acuerdos políticos para alcanzar un cese de fuego, se sigue insistiendo en que primero debe producirse un cese de las acciones armadas para proceder a implementar otros acuerdos. Aunque en la mesa de negociaciones tal postura pasa alternativamente de la explicitud a la ambigüedad, frente a la población y en la propaganda es indudable que el gobierno mantiene sus iniciales prioridades. Como en octubre pasado, el gobierno quiere signos de la voluntad pacificadora del FMLN, que pasan por el cese de sus hostilidades, que ahora incluye el no lanzamiento de nuevas ofensivas. Para el gobierno, pues, se antepone el objetivo militar a ulteriores logros o concesiones políticas.

Por su lado, el FMLN, ahora respaldado por el Acuerdo de Ginebra, se mantiene en que el gobierno no muestra voluntad real de paz cuando nacional e internacionalmente se dedica a promocionar aquella perspectiva, en desconocimiento de lo firmado ante la ONU. Para la insurgencia, la prioridad de las negociaciones se centra en objetivos de

carácter político, a los que difícilmente podría aspirar, una vez desaparecidas las presiones de tipo militar. Así pues, lo que en teoría parecía salvado con el Acuerdo de Ginebra, en la práctica continúa operando como obstáculo para la paz y como fermento para la guerra.

Sobre el tema de discusión centrado en la depuración de la Fuerza Armada, señalado por el presidente Cristiani como el avance sustantivo respecto de anteriores intentos de pacificación, baste recordar que ése fue también el tema principal de las pláticas de octubre de 1989. A decir verdad, el diálogo en aquel momento se salvó de la ruptura gracias a la intervención del presidente Arias, y en esta oportunidad y en el mismo punto también escapó del colapso gracias a las gestiones de Alvaro de Soto.

Cosa distinta es que en esta ocasión la discusión haya transcurrido bajo modalidades más concretas, a juzgar por lo poco que ha trascendido al conocimiento público. Como el año pasado, hay coincidencia en ambas partes de que es posible y necesario llegar a acuerdos políticos que superen las causas de la guerra, y la coincidencia se ha mantenido al pasar al tema específico de la impunidad. Sin embargo, que el tema se haya tratado con mayor seriedad, y quizá honestidad, más que a buena voluntad del gobierno o a las virtudes del nuevo método de diálogo, debe atribuirse a una imposición de la realidad y a la indignación desencadenada por el asesinato de los jesuitas de la UCA, así como por el encubrimiento manifiesto con que se ha intentado proteger a los autores intelectuales. Aun reconociéndose el mal de la impunidad, ha prevalecido el desacuerdo en cuanto a su interpretación y a las medidas que deben remediario y en esto ningún avance sustantivo puede apuntarse sobre las anteriores rondas pacificadoras.

Grave es que el diálogo-negociación se mantenga dentro de los parámetros prevalecientes el año anterior, y no podía ser de otra manera, cuando las nuevas condiciones imperantes a nivel mundial y regional ni siquiera se consideran con la seriedad que se requiere para el replanteamiento del diálogo en ese nuevo contexto, y peor aún, empleándose únicamente como instrumento para sacar ventaja militar sobre el adversario. En este punto se vuelve imperioso que el gobierno reconozca que, independientemente de las voluntades, para el FMLN han desaparecido las condiciones que posibilitaban su toma del poder por la vía armada, no sólo por razón del empate militar, sino por aquel entorno político regional y mundial. Tal reconocimiento es indispensable, no para esperar la deposición de las armas rebeldes, como sugiere la propaganda oficial, sino para redimensionar justamente las características y propósitos actuales de su adversario. Una cosa es combatir a quien pretendería instaurar una dictadura y otra muy distinta contener la

fuerza militar de quienes de momento sólo eso tienen para garantizar la transición a un sistema socio-político justo y seguro para todos sus partícipes.

Por las mismas razones, el FMLN también se encuentra imposibilitado de imponer su proyecto político y económico. De ahí la importancia que tiene la participación de las fuerzas políticas y sociales en el logro de un acuerdo de consenso que abra espacio tanto a las demandas populares como al trabajo político de la insurgencia. En tales circunstancias, seguir combatiendo al FMLN como una amenaza externa que pretende apoderarse del país por la fuerza es un anacronismo geopolítico e ideológico que encubre la inconfesada disposición a obtener una victoria militar aunada a la imposición de un proyecto antipopular.

Por su parte, el FMLN no parece haber tomado plena conciencia de que la presión militar y sobre todo el lanzamiento de nuevas ofensivas para flexibilizar la posición gubernamental, le reporta gravísimos costos políticos con una población bastante cansada y afectada por la guerra, costos que a la larga fortalecen los objetivos políticos de quienes más interesados se encuentran en asfixiar los espacios y las simpatías de que todavía gozan los rebeldes. Al parecer, el que se aventuren a una nueva ofensiva bélica responde a los deseos de los militares y del COPREFA, que juegan a la provocación insinuando que el que no se hayan realizado nuevas ofensivas desde la última de noviembre es prueba de la incapacidad militar del FMLN, como afirmara el 28 del corriente mes el Viceministro de defensa.

El secretario general de la ONU y su representante en las rondas negociadoras, a su vez, deben tener plena conciencia de que, aunque ambas partes se congratulen de su presencia como mediadores, de hecho proceden haciendo de la negociación otro escenario para ampliar la guerra, debilitando a la parte contraria y fortaleciendo la propia. Ello ya ocurrió en las rondas pasadas, y no resultaría tan problemático si el acuerdo de confidencialidad ahora vigente no impidiera el análisis abierto y objetivo de las propuestas y grado de flexibilidad con que las partes se conducen en la mesa negociadora. Dadas las facilidades y la superioridad propagandística de que disponen el gobierno y el ejército, ello se ha traducido en factor de desequilibrio en el desarrollo del conflicto en la nueva etapa negociadora. Puede que la confidencialidad sea indispensable para el buen éxito de las negociaciones, pero la absoluta desinformación puede resultar aún más peligrosa.

Todavía se está en un proceso de suyo difícil y previsiblemente largo, donde la desesperanza y el pesimismo no deben tener cabida. No obstante, bueno es que sobre la marcha puedan irse corrigiendo las deficiencias que puedan ponerlo en duda y peligro, cosa que sabrá hacer la mediación de Naciones Unidas.

## Confrontaciones bélicas

Las acciones de guerra no han menguado durante las últimas dos semanas. El desarrollo de las negociaciones entre el gobierno y el FMLN en Oaxtepec, lejos de propiciar la distensión de la atmósfera político-militar, ha potenciado una relativa intensificación del conflicto.

### **Escollos para el desescalamiento de la guerra**

En forma paralela a la realización de las reuniones de diálogo en Oaxtepec, la actividad bélica ha experimentado un sensible aceleramiento, tanto en términos de las acciones de índole estrictamente militar como de las de sabotaje. También la confrontación verbal de los bandos en pugna ha aumentado y se ha intensificado. El FMLN, inclusive, ha empezado a reiterar la amenaza de una nueva campaña militar de gran envergadura.

En este marco, las fuerzas guerrilleras han operativizado ataques y hostigamientos en la periferia norte de San Salvador —que sería el presunto escenario principal de una nueva ofensiva— y de San Miguel. Adicionalmente, se han registrado múltiples acciones armadas en los departamentos de Usulután, Cabañas y Chalatenango, siendo las suscitadas en este último las que alcanzaron mayor intensidad. Por otra parte, fuentes relacionadas con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), han denunciado que durante los últimos días las acciones de sabotaje contra la infraestructura eléctrica han arreciado de forma notoria, aunque sin proporcionar cifras.

El enfrentamiento verbal entre las partes ha cobrado nuevos matices a raíz de la exigencia rebelde de depurar, reestructurar y reducir las filas de la Fuerza Armada como condición para concertar un cese al fuego.

De acuerdo a un comunicado difundido por Radio Venceremos, la implementación de una campaña militar de gran alcance cobraría "enorme legitimidad" si los militares salvadoreños continúan aferrados al sistema de impunidad prevaleciente, bloqueando con ello la posibilidad de arribar a un acuerdo negociado. El comandante Miguel López expresó similares apreciaciones durante conferencia de prensa ofrecida en la zona norte del departamento de Chalatenango, el 20 de junio. Según López, si el ejército endurece su posición en torno al diálogo, provocando su empantanamiento, el FMLN respondería con una "nueva ofensiva".

De acuerdo a Radio Venceremos, el objetivo de la presunta ofensiva sería presionar al sector oficial para que ceda posiciones en algunos tópicos del proceso de negociación, especialmente los relativos a la depuración de la Fuerza Armada. El FMLN estima que, si con la ofensiva de noviembre obligó al gobierno a dialogar bajo la mediación de la ONU, una nueva ofensiva le obligaría a aceptar un acuerdo negociado.

La respuesta gubernamental a las amenazas del FMLN se ha centrado en el intento de deslegitimar la lucha armada y poner en entredicho la sinceridad del FMLN al concurrir a la mesa de negociaciones. Esta ha sido, por ejemplo, la actitud asumida por el Vice-ministro de Defensa, coronel Juan Orlando Zepeda, y por el COPREFA. Según un comunicado de prensa emitido por el COPREFA, las amenazas del FMLN de lanzar una nueva ofensiva militar desenmascaran su "voluntad de continuar por una utópica solución militar".

Es notorio cómo las declaraciones públicas de la oficialidad y organismos de propaganda castrense reflejan una evaluación de la coyuntura militar que implícitamente acepta que la guerra se encuentra en un estado de indefinición, cuya solución sólo

será posible por la vía negociada. En lo que toca a este punto, la postura castrense parece haber evolucionado mucho desde el año pasado, cuando, ante la victoria de ARENA en las elecciones presidenciales, altos jefes militares expresaron sus expectativas de una posible modificación de la estrategia militar que conduciría a la Fuerza Armada hacia la victoria definitiva sobre el FMLN.

El caso más ilustrativo es el del propio coronel Zepeda. Después de que en septiembre pasado expresara que el FMLN había perdido operatividad militar y que, por tanto, la Fuerza Armada confiaba en una "pronta e inminente" victoria militar (*El Diario de Hoy*, 2 de septiembre de 1989), ahora, menos de un año después, acepta la necesidad de resolver la guerra por medios políticos.

La modificación en la percepción de la guerra de parte del estamento castrense bien puede ser producto de la intensificación que el conflicto experimentó durante el último bimestre del año pasado; sin embargo, de ello no se sigue que una nueva ofensiva guerrillera pueda ablandar la posición castrense sobre las condiciones que el FMLN exige para acordar un cese al fuego, sobre todo en lo que toca a la depuración del ejército. El encubrimiento institucional de la Fuerza Armada en el caso de la UCA es una muestra palmaria de hasta dónde es capaz de llegar el ejército con tal de impedir tal depuración. El coronel Zepeda, al referirse a este punto, ha respondido que la depuración de la institución castrense no se dará porque el FMLN lo pida, ya que la Fuerza Armada tiene sus propias formas de afrontar tal situación. En relación al caso de la UCA, afirmó que "se ha entregado a un grupo de efectivos sobre los que recae la culpa y esto es suficiente". (Al parecer, no lo es, pues

posteriormente ha sido detenido, en relación al mismo caso, el teniente coronel Carlos Camilo Hernández, ex-subdirector de la Escuela Militar).

En este contexto, la solución negociada a la guerra, aunque más cercana, aún tiene que superar escollos colosales. La actividad bélica reciente muestra que no se pueden descartar sin más las advertencias rebeldes de operativizar una campaña militar de envergadura; los niveles operativos mostrados por el FMLN en los últimos días indican que tiene capacidad para ello.

## Intenso accionar militar

Durante las dos semanas comprendidas entre el 12 y el 26 de junio, la actividad militar —de acuerdo a los reportes del COPREFA— habría consistido en un total de 10 combates de encuentro y 17 acciones ofensivas por parte del FMLN, con un saldo de 10 muertos y 31 heridos en las filas castrenses, y 62 muertos y 6 heridos en las del FMLN. La distribución espacial de tales acciones fue la siguiente:

En San Salvador tuvieron lugar 2 combates y 6 ataques, los cuales, para el día 13, provocaron fuertes desplazamientos de tropas de infantería —incluyendo efectivos de los batallones Atlacatl y Belloso— y de unidades mecanizadas de tierra y aire en la zona norte del departamento, donde el ejército habría detectado movimientos de columnas guerrilleras a través de presuntos corredores logísticos.

En Chalatenango, se registraron 5 combates de encuentro, de los cuales 3 ocurrieron en el municipio de Dulce Nombre de María. En uno de éstos murieron, según el COPREFA, 35 guerrilleros. Adicionalmente, la presencia en la zona de efectivos de los batallones Bracamonte y Belloso sugiere que

la movilización de fuerzas guerrilleras en dicho departamento es particularmente intensa.

A finales del año pasado se revelaron sugerentes evidencias de una posible movilización de combatientes desde esta zona hacia ciudades importantes del país, las cuales se convirtieron en zonas de disputa durante la ofensiva de noviembre (**Proceso 414**). La alta cifra de combates de encuentro, en relación a las de otros departamentos, registrada en Chalatenango, sugiere que actualmente se están efectuando desplazamientos de fuerzas insurgentes, los cuales podrían obedecer a posibles planes militares futuros que contemplen ataques de considerable amplitud en otras zonas del país. La presencia guerrillera detectada en la zona norte del departamento de San Salvador —colindante con Chalatenango— parece dar más pábulo a tal hipótesis.

Otras acciones de guerra ocurrieron en la ciudad de San Miguel, donde el FMLN, en una combinación de acción militar y de sabotaje, atacó posiciones de avanzada cercanas a las instalaciones de la Tercera Brigada de Infantería y las que custodian la subestación eléctrica de "El Jacatal" —en las cercanías de la Brigada—. Acá, las unidades guerrilleras destruyeron, con fuego de morteros, un transformador de 75 mil megawatts y dos más de 75 y 56 kilowatts. En San Vicente, Morazán y La Libertad ocurrieron sendos combates de encuentro, mientras que en Usulután y Cabañas el FMLN em-

prendió cuatro acciones ofensivas. Finalmente, en el departamento de Cuscatlán se escenificó una emboscada guerrillera.

Los datos disponibles sobre el sabotaje del período arrojan un total de 4 postes y 3 torres del tendido eléctrico destruidas, además de la destrucción de otras estructuras, lo cual habría producido un déficit del 15 por ciento en la ciudad capital y en la zona central. En la zona oriental, el suministro de energía es anormal debido a los daños ocasionados a la subestación de "El Jacatal". El decomiso de armas, por parte del ejército, habría consistido en 5 fusiles, 1500 municiones y 1 aparato de comunicaciones.

El conflicto continúa su marcha indolentemente. El Presidente Cristiani inauguró recientemente la segunda fase del programa "Oriente 89", de claro signo contrainsurgente, mientras que el FMLN no sólo ha mantenido la intensidad de sus operativos sino que incluso amenaza con una nueva ofensiva si el gobierno no cede en el proceso de diálogo-negociación. Si bien, por un lado, Cristiani ha reconocido que los flujos de armas para el FMLN desde Nicaragua han disminuido tras la ofensiva de noviembre, la propia Violeta de Chamorro ha admitido recientemente que tal trasiego continúa (*The New York Times*, 20 de junio 1990). Por ningún lado se aprecian nuevos factores que permitan esperar una modificación del conflicto en su dimensión propiamente militar. La negociación es el único camino que puede conducir hacia la paz.

## La política laboral de ARENA

**CASO UCA:** Según un comunicado difundido el 18.06 por la Corte Suprema de Justicia, el Ministro de Defensa, general Rafael Humberto Larios, envió al Juez Cuarto de lo Penal, Dr. Ricardo Zamora, un oficio en el cual le informó que los empleados del archivo de la Escuela Militar que tienen más de seis años de trabajar ahí aseveraron que no hay ninguna orden verbal o escrita permanente de quemar los libros de registro de la Escuela. Asimismo, el comunicado informa que el 15.09 compareció ante el Juzgado Cuarto el teniente coronel Carlos Camilo Hernández, quien actualmente ejerce el cargo de ejecutivo del batallón Belloso. Hernández fungió como subdirector interino de la Escuela Militar en noviembre pasado, y ha sido acusado por el teniente Yushy Mendoza y por el ex-archivista de la Escuela de haber ordenado la incineración de los libros de control de entradas y salidas de la Escuela correspondientes a la noche en que fueron masacrados los jesuitas de la UCA. En su deposición, el teniente coronel Hernández negó haber dado tal orden, si bien admitió que había preguntado por los libros al archivista, Juan René Arana, porque, a su vez, el propio coronel Benavides se lo preguntó a él. El 27.06, el Juez Zamora decretó la detención provisional del teniente coronel Hernández, por el delito de "encubrimiento real".

En un comunicado difundido el 1 de junio, la UNTS evaluaba el primer año de gestión de ARENA en los siguientes términos: "sin escuchar reclamos, sugerencias, clamores de nadie, llevando a empresarios, profesionales y capas medias en general a situaciones de quiebra y hambre, ya no digamos a los trabajadores y demás sectores populares, que los ha lanzado a la hambruna diaria, al desempleo, al desalojo o parcelación de las tierras y a la negociación de los créditos, el congelamiento de los salarios mínimos mientras se fomenta el incremento a los precios de artículos, bienes y servicios de primera necesidad para el consumo popular, para los empresarios que no forman parte de los más ricos de los ricos, y que no tienen acceso a los dólares de exportación del café, ni provenientes de los créditos internacionales, sujetos a una serie de medidas crediticias, voraces y engorrosas, la quiebra se vuelve inevitable". El mismo día, la UNOC denunciaba que "en el año de gobierno de Cristiani se ha asesinado y desaparecido impunemente a sindicalistas, cooperativistas y trabajadores. Las Fuerzas Armadas han incrementado las detenciones arbitrarias e ilegales contra los trabajadores, así como los cateos ilegales y asedio constante a centros de trabajo y a residencias de dirigentes de organizaciones laborales". Muchos son a diario los campos pagados en los medios de comunicación, las conferencias de prensa, las marchas y otras medidas de presión que el sector laboral organizado hace para denunciar esta crítica situación y presentar al mismo tiempo sus propias demandas y sus propias alternativas.

Mientras, el Ministro de Trabajo y Previsión Social, Dr. Mauricio González Dubón, expresó el 15 de junio recién pasado, en su discurso ante la LXXVII Conferencia Internacional del Trabajo, realizada por la OIT en Ginebra, que "en el primer año de gobierno nos sentimos satisfechos por lo que podemos calificar como una paz laboral promisoria en El Salvador", a lo cual añadió que "la ausencia de huelgas que ha habido en El Salvador es el fruto de una oportuna y responsable conducta del gobierno en la aplicación de las normas que rigen las relaciones entre capital y trabajo". El sostener tal afirmación frente a la crítica realidad de los trabajadores salvadoreños, a su permanente movilización, y al manejo



violento que desde sus primeros meses de gestión implementó el gobierno de ARENA contra las organizaciones sindicales, resulta ciego e ideologizado, cuando no cínico. Las huelgas y conflictos laborales que se generaron en los primeros meses de la gestión de ARENA (**Procesos 397, 407**) fueron "manejados" con violencia innegable. Al maltrato jurídico y a la prepotencia patronal de la gestión anterior, el gobierno de ARENA ha añadido la violencia abierta para el desalojo de los huelguistas de los locales de las empresas en conflicto, y la fortificación de la presencia militar en los mismos.

Asimismo, a lo anterior, el funcionario añadió que "en el campo económico y social se ha invitado a los sectores productivos del país, empleadores y trabajadores, para llegar a una concertación que de una vez por todas trate de garantizar los derechos de los trabajadores y asociaciones sindicales, por una parte, y la seguridad de los empresarios y la producción, de otra, todo en beneficio de un mejor desarrollo que produzca generación de empleos productivos, mayores salarios y mejore la calidad de vida del pueblo salvadoreño, dentro del marco legal que lo garantice". Sin embargo, otra vez la realidad constituye un mentís de las declaraciones, cuando se liberalizan los precios de más de 200 productos, y se deja desprotegidos a los trabajadores ante los costos sociales del ajuste.

Finalmente, el Dr. González Dubón externó su preocupación por el boicot contra el café salvadoreño impulsado por ciertas agrupaciones sindicales de Estados Unidos y de varios países de Europa. Al respecto, comentó que "el derecho al trabajo está consagrado dentro de los derechos humanos. No los violemos con estas actitudes; cumplamos con los principios rectores de la justicia social, para el bienestar material y el desarrollo espiritual del hombre; para que los trabajadores tengan mejores condiciones de vida, igualdad de oportunidades y seguridad económica". Sin embargo, una de las primeras medidas de ARENA como administrador del estado fue el despido de más de 4 mil empleados públicos, al punto que suscitó, en marzo pasado, una prolongada huelga de hambre de trabajadores estatales despedidos.

Más allá de las intenciones personales del Ministro de Trabajo, su discurso ante la OIT corrobora las inconsistencias e hipocresías que han caracterizado la política laboral de ARENA en su primer año de gestión.

**INFORME:** En un comunicado emitido el 19.06, la Corte Suprema de Justicia informa que la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos presentó al Juzgado Cuarto de lo Penal un informe sobre las pesquisas que realizó en el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) del ejército para comprobar si miembros de esta dependencia habían celebrado el asesinato de los jesuitas de la UCA en la mañana del 16 de noviembre de 1989. Según el informe, la Comisión habría solicitado al jefe del Estado Mayor, coronel René Emilio Ponce, la nómina de los oficiales que se reunieron esa mañana, y autorización para interrogarlos. Entre los oficiales interrogados se encuentran el capitán David Koch Arana y el teniente Héctor Ulises Cuenca Ocampo. Asimismo, se encontraban en la reunión el coronel Carlos Mauricio Guzmán Aguilar y el capitán Luis Alberto Parada Fuentes, pero no fueron interrogados por encontrarse en Costa Rica, el primero (como agregado militar), y en Estados Unidos, el segundo. Según el informe, los oficiales interrogados coincidieron en que la citada reunión fue "evaluativa de la situación que se vivía en ese momento", cuando entró el capitán Carlos Fernando Herrera Carranza, jefe de operaciones del DNI, para informar que había escuchado en una radio local la noticia de que los jesuitas habían sido asesinados.

## El caso de los cooperativistas de FEDECOOPADES

No es de sorprenderse que el tema de la Fuerza Armada haya resultado tan difícil en la mesa de negociaciones en Oaxtepec, ni que dentro de los temas más complejos de la negociación esté el de la impunidad militar. Casi no se ha hablado todavía de una imprescindible etapa previa: la de investigar y dar a conocer la verdad. Sin embargo, miles de familiares en El Salvador todavía no saben lo que realmente ocurrió a sus seres queridos, o aun si están vivos.

Dentro de los muchos casos que pueden ilustrar la importancia del tema de la impunidad y la complejidad de los abusos militares está el caso del desaparecimiento de seis miembros de la Cooperativa San Cayetano El Rosario, afiliada a FEDECOOPADES, y ubicada en el cantón Llano de La Laguna, Las Chinamas (Ahuachapán). Los hechos ocurrieron el pasado mes de diciembre, cuando el coronel Mauricio Staben era comandante del Destacamento Militar No. 7, en Ahuachapán.

Las capturas de los cooperativistas se dieron en el contexto de una disputa sobre la tierra con la antigua propietaria, Sra. Clementina viuda de Avelar Falla, cuya hacienda fue expropiada definitivamente por FINATA el 26 de julio de 1985, a beneficio de la Cooperativa mencionada.

El 4 de diciembre de 1989, a las 6:00 a.m., dos camiones de soldados del citado Destacamento llegaron a la Cooperativa y catearon las oficinas y las casas de los cooperativistas, sin encontrar nada sospechoso. Al día siguiente, a las 9 de la noche, efectivos uniformados de la defensa civil de Las Chinamas llegaron a las casas de Juan Antonio Juárez Vásquez (26 años) y Julio César Juárez Vásquez (19 años) y se los llevaron. Juan Antonio, además de ser socio de la Cooperativa, prestaba servicio en la defensa

civil de Las Chinamas. Tanto la defensa civil como el Destacamento y otros cuerpos militares han negado tenerlos capturados.

El 26 de diciembre, la Sra. Amabel de Torres, en representación de CONDESA de C.V., llegó a la Cooperativa y habló con varios directivos, informándolos que ella había comprado la propiedad y que les daba un mes para dejarla porque iba a lotificarla en enero.

El 29 de diciembre, doce personas salieron de la Cooperativa en el camión propiedad de la misma, rumbo a Ahuachapán. Dentro del grupo, tres directivos de la Cooperativa iban para el Banco de Fomento Agropecuario. Al pasar por el beneficio Los Ausoles, un retén de soldados paró al camión, y cuatro hombres vestidos de civil, armados con pistolas, procedieron a capturar al presidente de la Cooperativa, Gerardo Antonio Zaldaña Salazar; al tesorero, Leonardo Pérez Núñez; al secretario, Juan Zaldaña Salazar; y al motorista, José Eladio Zaldaña Salazar. Soldados uniformados del Destacamento presenciaron las capturas.

Los capturados fueron obligados a subir a un jeep blanco, en el cual fueron llevados hacia Ahuachapán. Mientras tanto, dos de los captores condujeron el camión, con los pasajeros restantes, hacia Ahuachapán, donde los dejaron. En el camino hacia Ahuachapán pasaron frente a varios soldados e incluso por al menos un retén, al cual los captores hicieron señal de dejarlos pasar. Ese mismo día, familiares de los capturados se hicieron presentes al Destacamento; les respondieron que los cooperativistas no se encontraban ahí.

En enero, el coronel Staben citó a los familiares al cuartel, junto con representantes de organismos humanitarios. Se había molestado por los campos pagados que lo

responsabilizaban de las capturas, y pidió que buscaran en el cuartel para demostrar que él no tenía a los desaparecidos. El 6 de febrero, se hizo presente en la Cooperativa para reclamarles que seguían responsabilizándolo de las capturas, y amenazó con tomar medidas contra ellos.

El 24 de enero de 1990, la Sra. Amabel de Torres y la Sra. Clementina de Avelar Falla mandaron un grupo de hombres a la Cooperativa para tomar medidas de la hacienda para lotificarla. Los sujetos empezaron a chapodar algunos cultivos de la Cooperativa.

El 12 de febrero, el coronel Staben llevó a los cooperativistas al cuartel para una reunión con la Sra. de Avelar Falla y la Sra. de Torres. Staben insistió nuevamente en que no tenía nada que ver con la captura de los cooperativistas. Ese mismo día, a las 9:40 a.m, vecinos del cantón Los Magueyes, incluso la esposa de uno de los desaparecidos, Gerardo Antonio Zaldaña, vio a su esposo y a Leonardo Pérez, custodiados por soldados uniformados del Destacamento, a bordo de un camión militar. Ambos parecían sucios y golpeados.

El 21 de febrero, soldados del Destacamento realizaron un "acto cívico patriótico" en la Cooperativa, ofreciendo consultas médicas. En la mañana del 23 de febrero, soldados del Destacamento fueron a traer de su casa a la esposa de Gerardo Antonio, y a la suegra de éste, para exigirles que dijeran en cuál de los camiones del cuartel habían visto a los dos cooperativistas. Como todos los camiones son del mismo estilo y color, no pudieron identificarlo. En la tarde de ese mismo día, el coronel Staben se reunió en el cuartel con los familiares de los desaparecidos, para decirles una vez más que el Destacamento no había capturado a los cooperativistas y sugerirles que buscaran en otros lugares.

El 2 de marzo, el coronel Staben llegó

nuevamente a la Cooperativa, acompañado de soldados del Destacamento, agentes de la Guardia Nacional y reporteros del COPREFA, para conminar a los familiares de los desaparecidos y a las personas que presenciaron la captura, a firmar un documento en el cual exoneraban al Destacamento de la captura de los seis cooperativistas. En abril, antes de ser destituido del mando del Destacamento, el coronel Staben convocó a otra reunión en el cuartel con afiliados de la Cooperativa y delegados de organismos humanitarios, para manifestar una vez más que el Destacamento no era el responsable del desaparecimiento de los cooperativistas. Bajo toda esta presión, varias familias han abandonado la Cooperativa.

El coronel Staben fue destituido de su mando y nombrado agregado militar de la embajada salvadoreña en Tegucigalpa. No obstante, los familiares de los cooperativistas capturados no han podido averiguar nada sobre el destino de los seis desaparecidos.

La Fuerza Armada ha negado su participación en los hechos, a pesar de que el mismo Departamento de Estado norteamericano ha considerado "verosímiles" las versiones de la participación del ejército en los desaparecimientos. Asimismo, el ejército ha tratado de intimidar a los familiares y socios de la Cooperativa que han tenido el valor de denunciar el caso. Cuando la presión sobre el caso alcanzó cierto nivel, se tomó la decisión de destituir al coronel Staben, quien desde hacía bastante tiempo había sido vinculado con casos de serias violaciones de derechos humanos.

Queda por hacer una investigación adecuada del caso para establecer responsabilidades y determinar el destino de los capturados. Mientras no se dé este paso, la Fuerza Armada puede seguir defendiendo, impunemente, los intereses de los antiguos propietarios de las tierras de la Cooperativa, sin temor de que se le enjuicie por sus crímenes.

# Cumbre económica en Antigua Guatemala

Entre el 15 y 17 de junio recién pasado se realizó, en Antigua Guatemala, la octava cumbre de mandatarios centroamericanos. En ella participaron, por vez primera en una cumbre regional, Violeta de Chamorro y Rafael Angel Calderón. También participó, en calidad de observador, el presidente de Panamá, Guillermo Endara. Asimismo, la cita fue aprovechada por el Secretario de Estado norteamericano, James Baker, para sostener, el 18 de junio, entrevistas bilaterales, previo un breve encuentro conjunto, con los mandatarios del istmo. Tal como lo declararon los propios presidentes, la importancia mayor de la reunión estribaba en el esfuerzo por consolidar los avances registrados en materia de pacificación a través de acciones estructurales orientadas a combatir la pobreza endémica en el área. En la inauguración de la cumbre, el presidente anfitrión, Vinicio Cerezo, subrayó que "no habrá paz si no se satisfacen las necesidades fundamentales de la población...hasta ahora no ha existido voluntad política para resolver los problemas de la justicia social, la pobreza y la marginalidad".

### Cumbre económica

En efecto, la cita presidencial fue convocada para discutir la aguda problemática económica de la región, agudizada por los costos de la última década de confrontaciones bélicas en el área. A lo largo de los 80's, la región centroamericana experimentó una completa paralización de su desarrollo productivo, a lo cual se aunó un escandaloso deterioro de los niveles de vida de las mayorías populares. En Antigua Guatemala, los presidentes se plantearon el reto de enfrentar, con un programa conjunto de fomento al desarrollo, los efectos acumulados del desempleo generalizado, la disminución de los

salarios reales, el empeoramiento de las condiciones nutricionales de la población, el deterioro de los servicios sociales y el manejo del problema de la deuda exterior. Dicho programa tendría entre sus objetivos fundamentales el integrar las economías del área —un viejo y fallido objetivo—, reactivar el comercio intrarregional, transformar y modernizar las estructuras productivas, y gestionar ante la comunidad internacional una solución negociada a la deuda exterior así como procurar una reinserción eficiente y dinámica de la región en el mercado mundial.

Pese a la afinidad ideológica entre los seis mandatarios, las diferencias de criterio en la concepción e implementación de un programa específico de integración regional amenazaban frenar la iniciativa. La actitud costarricense frente al problema de la deuda externa es paradigmática de tal situación. Costa Rica, como se sabe, prefiere negociar individualmente su deuda al margen de cualquier estrategia regional tendiente a promover un manejo en bloque ante los acreedores internacionales. Sin embargo, al término de sus deliberaciones, los presidentes manifestaron unánimemente su satisfacción por los resultados del encuentro plasmados en la "Declaración de Antigua". En ella predominó el consenso de los gobiernos centroamericanos para tratar conjuntamente los problemas económicos comunes, si bien respetando las características peculiares de cada país. En lo fundamental, los presidentes acordaron impulsar una estrategia regional de desarrollo "hacia afuera" estructurada en dos etapas generales: en primer término, se buscaría eliminar todos los obstáculos al comercio interregional, tales como los aranceles, deudas bilaterales, efectos desencadenados por los programas de ajuste estructural, etc. En un segundo momento, se procedería a la reestructuración del proceso de

integración del área mediante la "complementación de los aparatos productivos individuales, para con ellos estructurar un sistema productivo regional eficiente y competitivo en el comercio mundial".

En esta línea de expectativas, el presidente de Costa Rica, Rafael Angel Calderón, caracterizó la cumbre como "una reunión de solidaridad en la que todos luchamos por un desarrollo común". Por su lado, el presidente Cerezo opinó que "por primera vez los países centroamericanos creen en un camino conjunto para salir de la crisis...hay plena armonía entre los presidentes y los planteamientos coinciden, tenemos objetivos comunes y ya no hay diferencias".

Aunque el tema económico predominó, el documento suscrito al final de la cumbre aborda también puntos complementarios de carácter político. En tal dimensión, la "Declaración de Antigua" se pronuncia a favor del respaldo a los procesos de diálogo que tienen lugar en diversos países del área, y exhorta, tanto a los ejércitos locales como a las potencias extrarregionales, a limitar el armamentismo. De la misma manera, la declaración aboga por el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos en la región.

### **El encuentro con Baker**

Según un comunicado emitido por la embajada norteamericana en Guatemala, el motivo de la visita de Baker al cónclave presidencial obedecía al deseo del Secretario de Estado de analizar con los gobernantes "el importante progreso hacia la paz, la reconciliación y el fortalecimiento de las

instituciones democráticas", evidenciado en la región tras la derrota electoral del Frente Sandinista en Nicaragua. La consolidación de un objetivo tan acariciado por la política exterior norteamericana para el área exigiría su contrapartida en apoyo económico.

De tal suerte, Baker, efectivamente, propuso, en sus entrevistas bilaterales con los presidentes, la creación de un fondo multinacional de ayuda para contribuir al desarrollo de la región. El club de donantes estaría integrado por Estados Unidos, Japón, la Comunidad Económica Europea (CEE) y otros países industrializados. La aplicación de dicha fórmula de cooperación, naturalmente, estaría condicionada al ajuste y estabilización de los índices macroeconómicos de los países del área y al compromiso real de los gobiernos locales de respetar los derechos humanos. Según Baker, "América Central está en posición de consolidar la democracia y lograr una paz duradera y el desarme y crear las condiciones para el crecimiento y oportunidades para que todos los pueblos de la región prosperen, particularmente los pobres".

Estados Unidos ha progresado, sin duda, en la consolidación de su hegemonía en la región con la puesta en marcha, por parte de los gobernantes locales, de proyectos neoliberales en materia socio-económica y política para organizar la convivencia social en las naciones del istmo. No puede existir, sin embargo, un Esquipulas para el desarrollo sin un previo y real Esquipulas para la paz y la democratización efectiva. Sin mantener y profundizar dicha unión, la crisis de los 80's continuará siendo irresoluble y el futuro de la región será aún incierto y oscuro.

## Comunicado de respuesta del FMLN a la Fuerza Armada

**Transcribimos el comunicado que la comandancia general del FMLN difundió el 22 de junio recién pasado en respuesta a la posición de la Fuerza Armada sobre la reunión de diálogo-negociación efectuada en Oaxtepec.**

1) Mientras el FMLN ha venido dando pasos concretos y expresando posiciones claras que ratifican su disposición a realizar todos los esfuerzos posibles para encontrar acuerdos viables, justos y realistas sobre los aspectos de depuración y cese de la impunidad de la FFAA gubernamental, lo mismo que en la temática sobre la desmilitarización de la sociedad salvadoreña: paralelamente con la reunión de negociación que se realiza en México, la FFAA lanza un comunicado el 20 de junio del presente año el cual, al margen de los subterfugios que contiene, prácticamente expresa su oposición a que la negociación pueda avanzar en estas temáticas, constituyéndose, de hecho, esta "posición de la Fuerza Armada" en una desautorización de la comisión negociadora del gobierno. Es un vano intento de la FFAA que pretende ocultar el hecho que el FMLN ha presentado en la mesa de negociación propuestas concretas en el tema fuerzas armadas, en tanto el gobierno no presenta ni propuestas, ni respuestas, aun cuando están comprometidos a negociar sin que COPREFA pueda desvirtuar ese compromiso.

2) Esta expresión pública de posición por parte de la FFAA gubernamental constituye, a su vez, una auto-reafirmación que en el actual régimen político salvadoreño la FFAA constituye un poder supremo y que no está dispuesto a que esa situación sea cambiada. Establece posición por encima de todo poder civil, señalando que no está dispuesta a la reducción, la desmilitarización; haciendo evidente que no cumplirá con los

resultados de la negociación si éstos afectan los límites que arbitrariamente determinan. Esto reafirma la imperiosa necesidad que existe de desmilitarizar radical y totalmente la realidad política salvadoreña como pre-requisito para que pueda haber democracia real y la sociedad civil predomine definitivamente. Esto requiere de la dinámica participación de todo el pueblo para derrotar esa actitud de intransigencia militarista. En primer plano se encuentra la necesidad de la incorporación de todos los sectores sociales en la lucha por la desmilitarización y la verdadera democracia.

3) Ese comunicado de la FFAA forma parte de toda una campaña implementada por el gobierno de Cristiani, el Alto Mando de la FFAA y la embajada norteamericana con el fin de incidir en el debate del Congreso de EEUU en que se discute sobre la reducción de la ayuda al gobierno salvadoreño. Tras manipular los hechos tratan de ocultar la inflexibilidad de sus posiciones y buscan culpar al FMLN de la escalada militarista que impulsan al hablar de una posible ofensiva militar guerrillera mientras, en la práctica, la FFAA despliega, simultáneamente a la realización de las negociaciones en México, un vasto operativo militar en los departamentos de San Salvador, Cuscatlán, Cabañas, Chalatenango, San Vicente y en la zona oriental del país, con la participación de batallones élites, brigadas y destacamentos y, ante ella, el FMLN reafirma su legítimo derecho a defenderse ofensivamente de todos los afanes militaristas que implementa la FFAA,

4) La FFAA plantea que está dispuesta a reducirse siempre y cuando el FMLN deponga las armas, usando como argumento el reciente desarme de la contra en Nicaragua. Esto es una muestra de la desesperación del Alto Mando que sabe que la situación en El Salvador es muy diferente y tiene orígenes propios y que le teme al hecho de que en El Salvador, al contrario de lo que sucedió en Nicaragua, se encuentran negociando directamente sentados en la mesa dos bien definidas contrapartes: el gobierno de El Salvador y el FMLN.

5) En El Salvador ha llegado la hora en que, a diez años de guerra cruenta, todos los sectores sociales y fuerzas políticas pongamos el máximo de esfuerzo por conseguir una solución política negociada que abra una nueva perspectiva de desarrollo al proceso político. Es hora de que la FFAA reconozca que esa solución presupone el cambio drástico del papel que ella ha jugado en la realidad política salvadoreña como instrumento de dominación política que hegemoniza frente a los demás órganos del Estado y subordina a toda la sociedad civil. Hemos entrado al principio de un período en el que se debe lograr la desmilitarización total del país.

6) Finalmente, de cara a nuestro pueblo al que nos debemos, de cara a la opinión internacional y de cara a nuestros enemigos políticos y militares, con plena responsabilidad y franqueza manifestamos que no habrá desmovilización de las fuerzas militares del FMLN si no hay una verdadera y comprobable desmilitarización total del quehacer político en la sociedad salvadoreña, y esta posición es así para garantía de que efectivamente pueda existir en El Salvador una verdadera democracia a través de la cual el pueblo en su conjunto sin distinciones de ninguna especie y totalmente libre de toda coacción pueda escoger pacífica y soberanamente el tipo de orden social que más convenga a sus intereses. Está llegando la hora en que la larga noche del predominio militarista sobre la sociedad salvadoreña finalice y despunte el nuevo día en el que el sol de la verdadera democracia haga fructificar la paz en justicia social para beneficio de todos los salvadoreños.

COMANDANCIA GENERAL DEL FMLN

El Salvador, 22 de junio de 1990.

## PRESENTACION

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significativos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales.

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e Información de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas".

## SUSCRIPCION ANUAL

El Salvador	
personal	¢50.00
correo	¢60.00
Centroamérica y Panamá	\$25.00
Norte y Sur América	\$35.00
Europa	\$40.00
Otras regiones	\$45.00

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad Centroamericana y dirigirse a Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: 240744 y 240011 Ext. 161 y 191.



